

Capacidad operativa de los gobiernos regionales y producción local por provincias en Ecuador

Operational capacity of regional governments and local production by provinces in Ecuador

Sarzosa Troya, Verónica Cumandá¹, Granja Robayo, Carlos Iván², Obando Sevilla, Oscar Vinicio³

Recibido: 12/07/2024

Aceptado: 10/08/2024

Publicado: 30/08/2024

Categoría: Artículo científico

RESUMEN

Esta investigación trata de establecer una relación entre la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, medida a través del índice de capacidad operativa (ICO) con la producción en el territorio (valor agregado bruto de la producción – VAB). Para ello se consideran los indicadores del ICO relativos a tres dimensiones: eje de planificación (cumplimiento de objetivos de PDOT, metas del PDOT, articulación y cumplimiento de metas), el eje financiero (efectividad del gasto, ejecución de inversiones, sostenibilidad financiera y dependencia fiscal) y el eje de participación ciudadana (sistemas de participación, mecanismo de participación, presupuestos participativos, control de la participación y rendición de cuentas). Para la validación de la relación teórica planteada, se estima una regresión lineal múltiple para el año 2022, obteniendo que el modelo de mínimos cuadrados robustos, dado que se evidencia problemas de heterocedasticidad, mostró una relación directa y significativa entre el VAB y el cumplimiento de metas y objetivos del PDOT, la dependencia fiscal y la sostenibilidad financiera. Estos hallazgos destacan la importancia de una planificación territorial efectiva, una gestión financiera sostenible y un apoyo adecuado del gobierno central para impulsar el crecimiento económico en las provincias ecuatorianas.

Palabras Clave: Capacidad operativa, GAD, planificación, participación ciudadana.

¹ Contraloría General del Estado (Quito, Ecuador)

vsarzosa@yahoo.es

ORCID: 0009-0000-4039-0988

² civan2002@hotmail.com

³ Universidad Técnica de Cotopaxi (Latacunga, Ecuador)

oscar.obando@utc.edu.ec

ORCID: 0009-0005-7795-7980

ABSTRACT

This research seeks to establish a relationship between the management of provincial decentralized autonomous governments, measured through the operational capacity index (ICO) with production in the territory (gross value added of production - GVA). For this purpose, the ICO indicators related to three dimensions are considered: the planning axis (fulfillment of PDOT objectives, PDOT goals, articulation and fulfillment of goals), the financial axis (effectiveness of spending, execution of investments, financial sustainability and fiscal dependence) and the citizen participation axis (participation systems, participation mechanism, participatory budgets, control of participation and accountability). For the validation of the theoretical relationship proposed, a multiple linear regression is estimated for the year 2022, obtaining that the robust least squares model, given that problems of heteroskedasticity are evident, showed a direct and significant relationship between the GVA and the fulfillment of goals and objectives of the PDOT, fiscal dependence and financial sustainability. These findings highlight the importance of effective territorial planning, sustainable financial management and adequate support from the central government to boost economic growth in Ecuador's provinces.

Keywords: Operational capacity, local government, planning, citizen participation, budget execution, local production.

Introducción

La descentralización en América Latina ha sido una tendencia significativa en las últimas décadas, buscando mejorar la eficiencia y la equidad en la administración pública mediante la transferencia de competencias, recursos y responsabilidades desde los niveles centrales de gobierno hacia los niveles subnacionales. Este proceso tiene diferentes matices y grados de implementación en cada país de la región. Ecuador, en particular, ha llevado a cabo importantes reformas en su estructura administrativa para fortalecer los gobiernos locales y regionales. La descentralización en América Latina se ha impulsado por varias razones, entre ellas la necesidad de mejorar la eficiencia administrativa, fomentar la participación ciudadana y promover el desarrollo regional. Según Tulchin y Selee (2004), la descentralización en América Latina ha sido vista como una respuesta a la centralización excesiva que caracterizó a muchos países de la región durante gran parte del siglo XX.

Por un lado, la descentralización ha sido promovida como una forma de democratización y empoderamiento local. Por otro lado, ha buscado mejorar la eficiencia en la prestación de servicios públicos mediante una mejor adecuación de las políticas a las necesidades locales (Falleti, 2005). En la región, se observan diferentes modelos de descentralización que varían en su grado de autonomía y en la transferencia de competencias. Por ejemplo, países como Brasil y México han adoptado modelos de descentralización más robustos, otorgando mayores poderes a los estados y municipios. En contraste, otros países como Perú han tenido procesos más centralizados con autonomía limitada para los gobiernos locales (Montero y Samuels, 2004).

El impacto de la descentralización en el desarrollo regional ha sido mixto. Algunos estudios, como el de Rodríguez-Pose y Ezcurra (2010), indican que la descentralización puede reducir las disparidades

regionales al permitir una mejor asignación de recursos y una mayor responsabilidad fiscal. Sin embargo, otros estudios sugieren que la descentralización puede agravar las desigualdades si no se implementa con mecanismos adecuados de redistribución y apoyo a las regiones menos desarrolladas (Falleti, 2005).

La descentralización en Ecuador ha sido un proceso continuo, con importantes reformas en las últimas décadas. Según la Constitución de 2008, Ecuador se define como un Estado descentralizado, reconociendo la autonomía de los gobiernos regionales y locales, y estableciendo un marco legal para la transferencia de competencias y recursos.

La Constitución de 2008 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) son las principales normativas que rigen la descentralización en Ecuador. Estos documentos establecen los principios y procedimientos para la descentralización, incluyendo la distribución de competencias y recursos entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) (Gobierno de Ecuador, 2008). Los GAD en Ecuador incluyen gobiernos provinciales, municipales y parroquiales. Cada nivel de gobierno tiene competencias específicas, como la planificación y desarrollo territorial, la gestión ambiental, y la prestación de servicios públicos. Los GAD tienen la responsabilidad de planificar y ejecutar proyectos de desarrollo local, ajustándose a las necesidades y prioridades de sus comunidades (Gobierno de Ecuador, 2010).

La descentralización fiscal, entendida como la transferencia de competencias, recursos y responsabilidades desde los gobiernos centrales a los gobiernos subnacionales, es una estrategia clave para mejorar la eficiencia y la equidad en la gestión pública. En el contexto de la producción regional, los gobiernos regionales juegan un papel crucial al influir en la asignación de recursos, la implementación de políticas y la creación de un entorno favorable para el desarrollo económico.

Existen una serie de teorías que tratan de explicar el proceso de descentralización y el impacto que tiene en territorio, destacan la Teoría de la Descentralización Fiscal, la Teoría del Federalismo Fiscal, el Modelo de Competencia entre Jurisdicciones, la Teoría del Crecimiento Endógeno, la Teoría de la Gobernanza Multinivel, la Teoría del Capital Social y Desarrollo Regional.

La teoría de la descentralización fiscal se basa en el principio de subsidiariedad, que sostiene que las decisiones públicas deben tomarse lo más cerca posible de los ciudadanos para reflejar mejor sus preferencias y necesidades. Este enfoque se fundamenta en la idea de que los gobiernos locales tienen un mejor conocimiento de las condiciones y demandas locales, lo que les permite asignar recursos de manera más eficiente (Oates, 1972).

Estudios empíricos han demostrado que la descentralización fiscal puede tener efectos positivos en el desarrollo económico regional. Bird y Smart (2002) encontraron que la transferencia de recursos fiscales a los gobiernos locales en varios países en desarrollo llevó a una mejora significativa en la eficiencia de la prestación de servicios públicos y un aumento en el crecimiento económico regional.

En segundo lugar, la Teoría del Federalismo Fiscal, desarrollada por Musgrave y Oates, proporciona un marco teórico para la distribución de funciones entre los diferentes niveles de gobierno. Musgrave (1959) identificó tres funciones principales del gobierno: asignación de recursos, redistribución de ingresos y estabilización económica. Según esta teoría, la asignación de recursos es una función que se maneja mejor a nivel local debido al conocimiento específico que tienen los gobiernos regionales sobre sus

respectivas áreas. Oates (1999) argumenta que el federalismo fiscal permite a los gobiernos subnacionales adaptar las políticas públicas a las preferencias locales, lo que puede mejorar la eficiencia y la efectividad de la asignación de recursos.

En cuanto al Modelo de Competencia entre Jurisdicciones, propuesto por Tiebout (1956), sostiene que los ciudadanos "votan con los pies" al elegir residir en la jurisdicción que mejor satisfaga sus preferencias fiscales y de servicios públicos. Este modelo sugiere que la competencia entre gobiernos regionales puede llevar a una mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos y en la gestión de recursos.

La competencia entre jurisdicciones puede fomentar la innovación y la eficiencia en la administración pública, ya que los gobiernos regionales buscan atraer y retener residentes y empresas. Esto puede conducir a una mejora en la calidad de los servicios públicos y a un entorno más favorable para la actividad económica. Oates (2006) destaca que la competencia entre gobiernos regionales puede resultar en una asignación más eficiente de recursos y en una mayor capacidad para responder a las demandas locales. Por su parte, la Teoría del Crecimiento Endógeno, desarrollada por Romer (1986) y Lucas (1988), enfatiza el papel de los factores internos, como la inversión en capital humano, la innovación y las políticas locales, en el crecimiento económico. Esta teoría sugiere que las políticas que fomentan la educación, la investigación y el desarrollo pueden tener un impacto significativo en el crecimiento económico a largo plazo. Los gobiernos regionales, al tener mayor autonomía y capacidad para diseñar políticas adaptadas a las necesidades locales, pueden desempeñar un papel crucial en la promoción del crecimiento endógeno. La investigación de Gennaioli et al. (2014) muestra que las regiones que invierten más en capital humano y en políticas de innovación tienden a tener tasas de crecimiento económico más altas. Esto sugiere que los gobiernos regionales pueden influir significativamente en el valor de la producción regional mediante la implementación de políticas que fomenten el crecimiento endógeno.

En cuanto a la Teoría de la Gobernanza Multinivel se centra en cómo las decisiones y políticas públicas se implementan a través de múltiples niveles de gobierno que interactúan y cooperan. Esta teoría subraya la importancia de la coordinación entre los niveles de gobierno para lograr objetivos de desarrollo económico y mejorar la producción regional (Hooghe & Marks, 2003). Benz y Zimmer (2010) argumentan que la gobernanza multinivel puede mejorar la efectividad de las políticas públicas al permitir una mayor flexibilidad y adaptación a las condiciones locales. Esto puede resultar en una mayor eficiencia y un impacto positivo en la producción regional.

La Teoría del Capital Social y Desarrollo Regional propuesta por Putnam (1993) y Coleman (1988), sostiene que las redes de relaciones, la confianza y la cooperación entre los ciudadanos y las instituciones son cruciales para el desarrollo económico. El capital social puede mejorar la capacidad de coordinación y colaboración, lo que a su vez puede impulsar la producción regional. Putnam (1993) encontró que las regiones con altos niveles de capital social tendían a tener un mejor desempeño económico. Esto sugiere que los gobiernos regionales pueden influir en la producción regional mediante políticas que fortalezcan el capital social.

De esta forma, las teorías o modelos indicados establecen que los gobiernos regionales pueden utilizar sus conocimientos locales para identificar y priorizar inversiones en infraestructura que tengan el mayor impacto en la producción regional. Además, al invertir en programas de educación y capacitación, los

gobiernos regionales pueden mejorar el capital humano de la región. Esto no solo aumenta la productividad laboral, sino que también fomenta la innovación y el emprendimiento, elementos clave para el crecimiento económico sostenible.

Los gobiernos regionales pueden implementar incentivos fiscales para atraer inversiones y apoyar la investigación y el desarrollo. Esto puede incluir reducciones de impuestos para empresas innovadoras, subvenciones para proyectos de investigación y colaboración con universidades y centros de investigación. Mediante la promoción de la participación ciudadana y el fortalecimiento de las redes comunitarias, los gobiernos regionales pueden mejorar la cohesión social y la colaboración. Esto no solo contribuye a un entorno más estable y seguro, sino que también puede facilitar la implementación de políticas y proyectos de desarrollo económico.

En este contexto y dada la importancia que experimentó el proceso de descentralización en Ecuador a partir de la promulgación de la Constitución del año 2008, esta investigación pretende identificar la posible correlación existe entre la capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, medida a través de las dimensiones de ejecución financiera, planificación y participación ciudadana estimado por el Consejo Nacional de Competencias para el período 2022.

Metodología

Para abordar el propósito de la investigación se considera la base de datos sobre la estimación del índice de capacidad operativa (ICO) de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales para el período 2022. Este índice “busca estimar la capacidad de gestión de las competencias y funciones de cada gobierno local conforme tres componentes: planificación y ordenamiento territorial, gestión financiera y participación ciudadana; cada uno con una valoración de 10 puntos” (Consejo Nacional de Competencias, 2021, p. 8). Dado que cada una de las dimensiones o componentes tiene una puntuación máxima de 10 puntos, el valor máximo del ICO es de 30 puntos, lo que representaría una capacidad operativa perfecta. El ICO está estructurado por tres dimensiones relacionadas con la: 1) Planificación y Ordenamiento Territorial (PDOT), 2) la gestión financiera y 3) la participación y control ciudadano. En el primer caso, se analizan indicadores relacionados con la calidad de los objetivos del PDOT, la calidad de las metas del PDOT, la articulación de los proyectos del PDOT y el índice de cumplimiento de metas (ICM). En el segundo se considera la ejecución presupuestaria del plan de inversiones, la sostenibilidad financiera, la eficiencia del gasto de inversión y capital, la dependencia fiscal. Por último, en la dimensión de participación ciudadana se incluye el sistema de participación, los mecanismos de participación, el presupuesto participativo, los mecanismos de control y la rendición de cuentas (Consejo Nacional de Competencia, 2021).

Partiendo de estos datos se estima una regresión lineal que considere como variable dependiente el valor agregado bruto de la producción a precios corrientes (VAB) para cada provincia y como variables explicativas cada uno de los indicadores que se incluyen en el índice de capacidad operativa (X_{ni}), tal como se presenta en la ecuación 1.

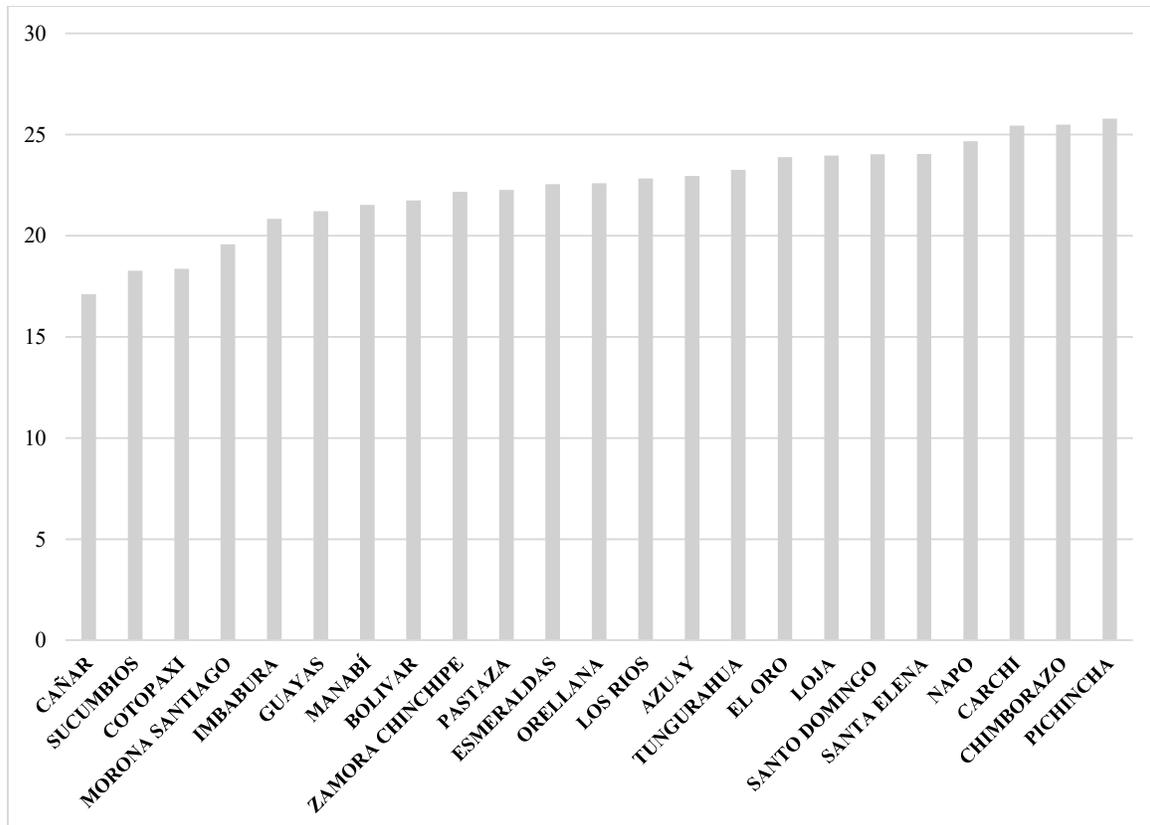
$$VAB_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \dots + \beta_n X_{ni} + \varepsilon_i \quad (1)$$

Para validar el modelo se emplean las pruebas de correcta especificación (Ramsey), normalidad de residuos (Jarque-Bera), homocedasticidad de la varianza (Breusch-Pagan), ausencia de multicolinealidad (factor de inflación de varianza), de manera de garantizar estimadores insesgados y de mínima varianza (Gujarati, 2021).

Resultados y Discusión

Al analizar el ICO de cada una de las 23 provincias de Ecuador (sin considerar Galápagos) se observa en la figura 1, que para el año 2022, Pichincha se ubica en el primer lugar (25,78 puntos), seguido de Chimborazo (25,50) y Carchi en tercer lugar (25,45). Los GADs provinciales con las menores puntuaciones están representados por Cañar (17,11 puntos), Sucumbios (18,28) y Cotopaxi (18,36).

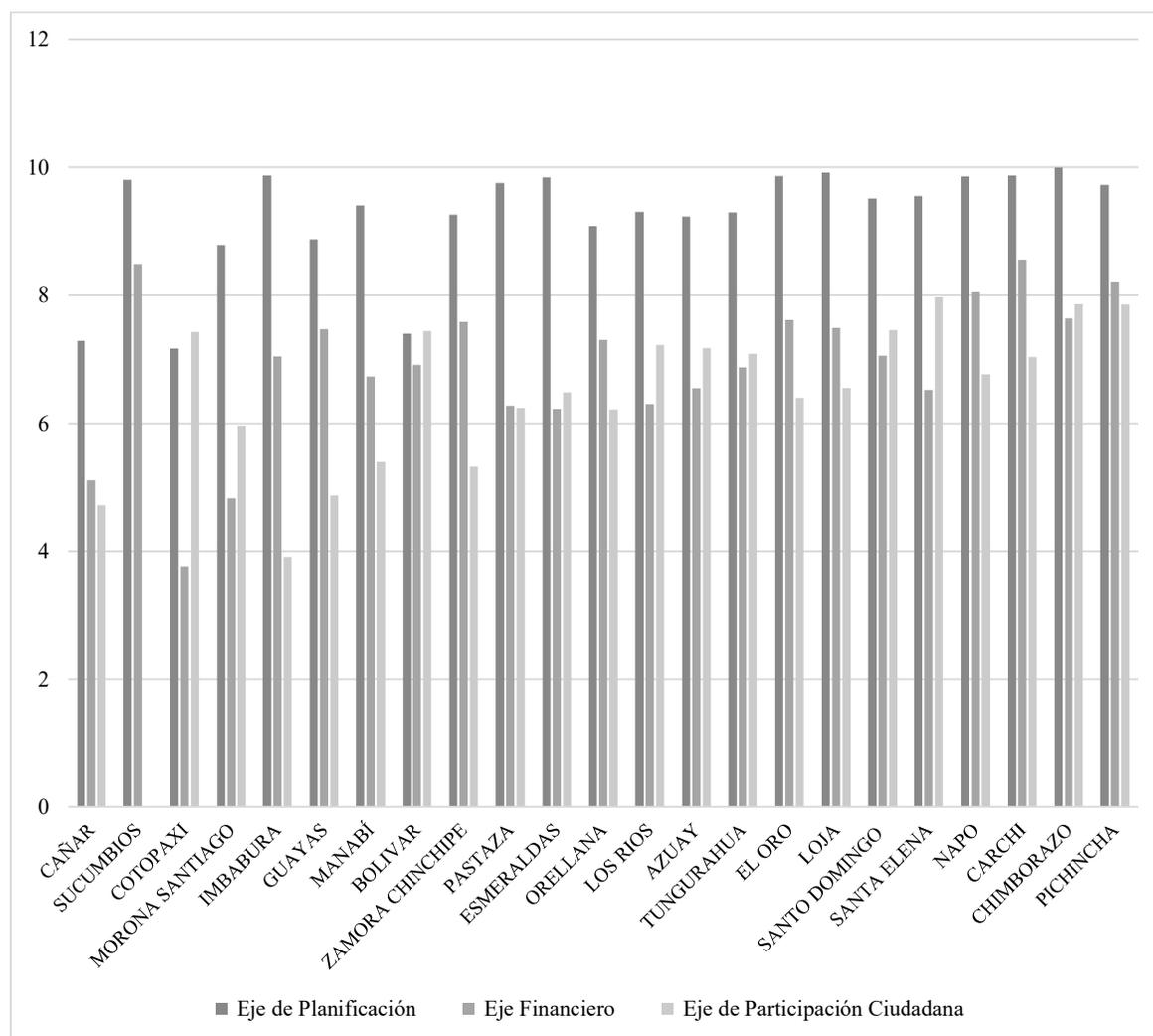
Figura 1: Comportamiento del Índice de capacidad operativa de los GADs provinciales, 2022



Fuente: Consejo Nacional de Competencia, 2024.

Si se detalla el comportamiento de las tres dimensiones (planificación, finanzas y participación ciudadana), en la figura 2 se observa que en la mayoría de los casos el componente de planificación asociado con el PDOT es el mejor valorado, salvo el caso de Cotopaxi y Bolívar que mantiene valores similares al eje de participación ciudadana.

Figura 2: Comportamiento de las dimensiones del ICO de los GADs provinciales, 2022



Fuente: Consejo Nacional de Competencia, 2024.

Los GAD provinciales que reportan los mejores resultados en el eje de planificación para el año 2022 son Chimborazo (10 puntos), Imbabura (9,87) y Carchi (9,87). Mientras que en el eje financiero se encuentra en primer lugar Carchi con 8,54, seguido de Sucumbíos con 8,47 y en tercer lugar Pichincha con 8,20. Por último, el componente de participación ciudadana está liderado por Santa Elena con 7,97, ubicándose posteriormente Chimborazo y Pichincha con 7,86.

A partir de los datos obtenidos del ICO se estimó un modelo de regresión lineal para tratar de explicar el comportamiento del VAB a partir de los indicadores empleados en dicho índice para cada una de las tres dimensiones (tabla 1).

Tabla 1: Modelización de la relación entre el VAB y el ICO

Variables	Modelo 1 Mínimos cuadrados ordinarios	Modelo 2 Mínimos cuadrados robustos
PDOT objetivos * PDOT metas	1,48e+8	1,48e+8*
	(1,06e+8)	(7,81e+07)
Articulación PDOT	-1,99e+7	-1,99e+7*
	(1,80e+7)	(1,07e+07)
Índice de cumplimiento de metas	-2592483	-2592483
	(3677179)	(2613108)
Ejecución de inversiones	2762138	2762138
	(2648756)	(1998784)
Sostenibilidad * dependencia fiscal	3,14e+07***	2,14e+07
	(8292554)	(1,56e+07)
Eficiencia del gasto	6078161	6078161
	(5105674)	(5226466)
Sistema de participación	-941794	-941794
	(2908302)	(1726596)
Mecanismos de participación	-269303,5	-269303,5
	(2779392)	(2280145)
Presupuestos participativos	5531244	5531244
	(8606573)	(4919486)
Mecanismo de control	264643,4	264643,4
	(1,94e+07)	(8957519)
Rendición de cuentas	1191392	1191392
	(3917859)	(2675330)
Constante	-1,93e+07	-1,93e+07
	(2,61e+07)	(2,48e+07)
Prueba F	5,10***	5,09***
R2	0,64	0,64
Prueba Ramsey (correcta especificación)	2,64	2,64
Prueba de Breusch y Pagan	31,15***	No aplica
Factor inflación varianza	3,27	3,27
Jarque Bera (normalidad)	0,3023	0,3023

Nota: el nivel de significancia menor a 1% está representado por ***, entre 1% y 5% con **, entre 5% y 10% *

Se parte de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios considerando la interacción de dos grupos de variables, dado que teóricamente se refuerzas sus efectos. Tal es el caso del cumplimiento de metas y objetivos de PDOT, así como la sostenibilidad financiera y la dependencia fiscal. Al validar los supuestos necesarios para garantizar la confiabilidad de los resultados, se detectan problemas de heterocedasticidad de la varianza de los residuos por lo cual fue necesario estimar un modelo de mínimos cuadrados robustos (Modelo 2) en el cual se garantiza la validación de los supuestos.

Este modelo permite identificar como variables estadísticamente significativas del VAB a la interacción de los objetivos y metas del PDOT y de la sostenibilidad financiera y dependencia fiscal. De manera tal que un mayor cumplimiento de metas y objetivos eleva el VAB, así como una mayor sostenibilidad financiera potenciada por la dependencia fiscal, mejora también los resultados de producción local.

La relación positiva entre el cumplimiento de los objetivos y metas del PDOT y el VAB, sugiere que las provincias que implementan de manera efectiva sus planes de ordenamiento territorial tienden a experimentar mayores niveles de producción económica. En este contexto, Litman (2013) destaca que la planificación territorial efectiva puede mejorar la eficiencia económica mediante la optimización del uso del suelo y la infraestructura. Rodríguez-Pose y Ezcurra (2010) también argumentan que la planificación estratégica del territorio puede reducir las disparidades regionales y promover el desarrollo económico.

En cuanto a la sostenibilidad financiera que también mostró una relación positiva y estadísticamente significativa con el VAB, puede indicarse que las provincias con una mejor gestión financiera pueden destinar más recursos a inversiones productivas, lo que se traduce en un mayor valor agregado bruto. Según Smoke (2003), la sostenibilidad financiera es esencial para la provisión eficiente de servicios públicos y la implementación de proyectos de infraestructura. La capacidad de una región para gestionar sus finanzas de manera sostenible puede impulsar su desarrollo económico al asegurar una provisión continua de servicios esenciales y la realización de inversiones estratégicas.

Por último, la dependencia fiscal resultó ser significativa y positivamente relacionada con el VAB. Este hallazgo sugiere que, en el caso de Ecuador, las transferencias del gobierno central son cruciales para financiar inversiones que impulsan la producción regional. Bird y Smart (2002) argumentan que las transferencias intergubernamentales pueden desempeñar un papel importante en la nivelación de las desigualdades fiscales y en la provisión de recursos para inversiones productivas. Estas transferencias permiten que las regiones menos desarrolladas financien proyectos esenciales que de otro modo no podrían costear.

Conclusiones

La relación positiva entre el cumplimiento de los objetivos del POT y el VAB indica que una planificación territorial efectiva puede tener un impacto significativo en el desarrollo económico. Las provincias que logran cumplir con sus planes de ordenamiento territorial pueden optimizar el uso del suelo, mejorar la infraestructura y atraer inversiones, lo que a su vez incrementa el valor de la producción regional.

La sostenibilidad financiera permite a las provincias invertir en áreas clave como la infraestructura, la educación y la salud, todas las cuales son fundamentales para el desarrollo económico. La relación positiva

observada sugiere que las provincias con una mejor gestión financiera pueden mantener y expandir sus actividades económicas, contribuyendo así a un mayor VAB.

Aunque la dependencia fiscal puede parecer un indicador negativo de autonomía financiera, en el contexto de Ecuador, las transferencias del gobierno central parecen ser esenciales para el desarrollo regional. Las provincias que reciben más fondos del gobierno central pueden financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos que impulsan la actividad económica y el VAB.

Los resultados sugieren que las políticas que promuevan el cumplimiento de los planes de ordenamiento territorial pueden tener un impacto positivo en el desarrollo económico regional. Es crucial que los gobiernos provinciales reciban el apoyo necesario para implementar y supervisar efectivamente sus planes de ordenamiento territorial.

Las políticas destinadas a mejorar la sostenibilidad financiera de las provincias deben ser una prioridad. Esto incluye la capacitación en gestión financiera, el desarrollo de sistemas de recaudación fiscal eficientes y la promoción de la transparencia y la responsabilidad fiscal.

Si bien la dependencia fiscal tiene un impacto positivo en el VAB, es importante que las provincias busquen reducir su dependencia de las transferencias del gobierno central a largo plazo. Esto podría lograrse mediante el fortalecimiento de las capacidades locales de generación de ingresos y la diversificación de las fuentes de financiamiento.

El análisis de la relación entre el cumplimiento de los objetivos y metas del plan de ordenamiento territorial, la sostenibilidad financiera y la dependencia fiscal con el valor agregado bruto de la producción revela que todas estas variables tienen un impacto significativo y positivo en el desarrollo económico regional. Estos hallazgos destacan la importancia de una planificación territorial efectiva, una gestión financiera sostenible y un apoyo adecuado del gobierno central para impulsar el crecimiento económico en las provincias ecuatorianas.

Bibliografía

- Benz, A., & Zimmer, C. (2010). The EU's competences: The 'vertical' perspective on the multilevel system. *Living Reviews in European Governance*, 5(1) 1-31
- Bird, R., & Smart, M. (2002). Intergovernmental fiscal transfers: International lessons for developing countries. *World Development*, 30(6), 899-912. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00016-5](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00016-5)
- Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Consejo Nacional de Competencias (2021). Informe técnico. Capacidad Operativa de los GAD como estrategia de desarrollo territorial. Quito
- Falleti, T. G. (2005). A Sequential Theory of Decentralization: Latin American Cases in Comparative Perspective. *American Political Science Review*, 99(3), 327-346. <https://doi.org/10.1017/S0003055405051695>
- Gennaioli, N., La Porta, R., López-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2014). Growth in regions. *Journal of Economic Growth*, 19(3), 259-309. <https://doi.org/10.3386/w18937>
- Gobierno de Ecuador. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito.

- Gobierno de Ecuador. (2010). *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)*. Quito
- Gujarati, D. N. (2021). *Essentials of econometrics*. Sage Publications.
- Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the Central State, but How? Types of Multi-Level Governance. *American Political Science Review*, 97(2), 233-243.
- Litman, T. (2013). *Planning principles and practices*. Victoria Transport Policy Institute.
- Lucas, R. E. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3-42.
- Montero, A. P., & Samuels, D. J. (2004). *Decentralization and Democracy in Latin America*. Notre Dame Press.
- Musgrave, R. A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. Nueva York: McGraw-Hill.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. Nueva York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, W. E. (1999). An Essay on Fiscal Federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120-1149.
- Oates, W. E. (2006). The Many Faces of the Tiebout Model. *The Property Tax, Land Use, and Land Use Regulation*, 13-20.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does Decentralization Matter for Regional Disparities? A Cross-Country Analysis. *Journal of Economic Geography*, 10(5), 619-644.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002-1037.
- Smoke, P. (2003). Decentralization in Africa: Goals, dimensions, myths and challenges. *Public Administration and Development*, 23(1), 7-16.
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416-424.
- Tulchin, J. S., & Selee, A. D. (2004). *Decentralization and Democratic Governance in Latin America*. Woodrow Wilson Center Press.